

NEOLIBERALISMO Y GENOCIDIO EN EL RÉGIMEN FUJIMORISTA

José Honorio Martínez

Universidad Nacional Autónoma de México, México. E-mail: polinesios@yahoo.es

Recibido: 23 Abril 2009 / Revisado: 21 Mayo 2009 / Aceptado: 1 Junio 2009 / Publicación Online: 15 Junio 2009

Resumen: La puesta en práctica del neoliberalismo durante la gestión de gobierno del presidente Alberto Fujimori (1990-2001) en el Perú, implicó el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de una dictadura sostenida con el apoyo de las Fuerzas Armadas. El régimen fujimorista se prolongó por medio de dos reelecciones, la primera en 1995, la segunda en abril del 2000, en las cuales predominaron la corrupción, el fraude y el terrorismo de Estado. Durante este régimen los peruanos fueron desposeídos de sus empresas, despojados de sus derechos sociales y garantías civiles, y víctimas de un genocidio que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación causó la muerte de setenta mil personas.

Palabras Clave: Neoliberalismo, corrupción, terrorismo de Estado, Fujimori.

INTRODUCCIÓN

En el presente artículo se analiza la trayectoria del régimen de fujimorista en el Perú desde su ascenso al gobierno en julio de 1990 hasta su caída en noviembre del año 2000, para resaltar de manera particular cómo los mandatos de los principales organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial) implicaron el desmantelamiento del ordenamiento constitucional, conduciendo a la instauración de una dictadura sostenida con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El régimen fujimorista se prolongó a través de dos reelecciones, la primera en 1995, la segunda en abril del 2000, en las cuales predominaron la corrupción, el fraude y el terrorismo de Estado. Durante este régimen los peruanos fueron desposeídos de sus empresas, despojados de sus

derechos sociales y garantías civiles, y víctimas de un genocidio que según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación causó la muerte de 70 mil personas.

1. LA LLEGADA DE ALBERTO FUJIMORI AL GOBIERNO

La elección de Alberto Fujimori como presidente del Perú en junio de 1990 estuvo precedida por el agravamiento de las condiciones económicas en el período presidencial previo; en efecto, el gobierno del presidente Alan García (1985-1990) al ser aislado por los organismos financieros internacionales (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial), enfrentó una complicada situación económica caracterizada por el aumento del costo de vida, el índice de precios al consumidor se incrementó en 10.300 por ciento entre 1986 y 1990, y la pauperización y el empobrecimiento. De acuerdo con González de Olarte el producto interno bruto por persona que en 1980 era de 938 dólares, en 1989 se redujo a 718 dólares, al tiempo que el 20% más pobre de la población recibía apenas el 3% del ingreso y el 10% más rico recibía el 45% del mismo.

El acrecentamiento de las dificultades económicas fue uno de los resultados del aislamiento financiero internacional al que fue sometido el gobierno de Alan García. Éste trató de establecer un límite en el monto de recursos para el pago de la deuda externa (10% del valor de las exportaciones), lo que le significó el cierre de las puertas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En 1986, la iniciativa de Alan García de crear un bloque de países latinoamericanos deudores fue ignorada por la mayoría de los gobiernos de la región siguieron las orientaciones de los organismos

financieros y se adscribieron a las políticas neoliberales. La aplicación de neoliberalismo implicó para el Estado la privatización de sus empresas, la pérdida de su rol empresarial, el recorte de la política social y la renuncia a normar las relaciones entre capitalistas y trabajadores.

El anterior fue el contexto de una contienda electoral, en la que los dos candidatos más favorecidos por los medios de comunicación, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, representaban prácticamente el mismo programa.

Vargas Llosa incursionó abiertamente en la actividad política defendiendo el interés de los banqueros y grandes empresarios en el debate sobre el proyecto de nacionalización de la banca presentado por el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) en 1987. En junio de 1989 fue proclamado candidato a la presidencia a nombre del Movimiento Libertad y con el respaldo del partido Acción Popular del ex-presidente Fernando Belaunde Terry, y el Partido Popular Cristiano.

Tanto Fujimori como Vargas Llosa obtenían su simpatía de su virtual distanciamiento frente a los partidos y “la política”. En los ochenta, la deslegitimación de los partidos sirvió para que se desarrollara el desprecio generalizado de la política. Los programas y los debates pasaron a desuso imponiéndose en su lugar el culto a las figuras, o a las personalidades promovidas mediáticamente. Fujimori, quien contaba con el respaldo de la iglesia católica y los sectores empresariales transnacionales, presentado con un aura tecnocrática y como símbolo del esfuerzo y del trabajo fue ensalzado como el gerente indicado para llevar adelante las “reformas estructurales” como eufemísticamente se le llamó a la agenda neoliberal.

2. EL NEOLIBERALISMO COMO NECESIDAD SISTÉMICA DEL CAPITAL

Desde una perspectiva histórica del desenvolvimiento del sistema capitalista se pueden mencionar dos situaciones que hicieron del neoliberalismo una necesidad sistémica; de un lado, el comienzo de un ciclo recesivo a fines de los sesenta, y de otro, la tendencia decreciente de la tasa media de ganancia. La primera situación ha sido ampliamente ilustrada por Immanuel Wallerstein en distintos textos como: “La economía mundial capitalista:

perspectivas a medio plazo” publicado en *Geopolítica y geocultura*, Kairós Barcelona 2007, y la segunda, ha sido expuesta por Perry Anderson y David Harvey en trabajos como *La trama del neoliberalismo: mercado, crisis y exclusión social*, Eudeba, Buenos Aires, 1999 y “El neoliberalismo como creación destructiva”, en *Revista Memoria* No. 232 de septiembre de 2008, respectivamente.

Pese a que la ideología neoliberal venía sedimentándose desde los años cuarenta, solamente hasta los setenta encontró un terreno fértil para su aplicación. De acuerdo con Agustín Cueva, la génesis histórica del neoliberalismo está asociada a una de las crisis de sobreacumulación del capitalismo en los setenta. Hacia esos años había un exceso de capital en los bancos, dicho capital sobrante “no se canaliza hacia la inversión directa (productiva) porque la recesión restringe el tamaño del mercado, contrayendo la “demanda solvente” –y nadie invierte en producir si no hay quien compre- lo cual, crea, mientras no ocurran determinados cambios estructurales, una tendencia a la “inversión” indirecta, es decir, a la conversión del capital sobreacumulado en su forma perversa de capital a interés”¹.

En efecto, el sustento ideológico del neoliberalismo fue desarrollado por el pensamiento conservador desde 1940, durante varias décadas se mantuvo relativamente invisibilizado, hasta que en los setenta fue ampliamente retomado y puesto en práctica por los gobiernos de Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos, Margaret Thatcher (1979-1990) en Inglaterra y el dictador Augusto Pinochet en Chile (1973-1989).

Entre los pensadores que alentaron las ideas neoliberales figuraron: Friedrich Hayek y Milton Friedman, ganadores del premio Nóbel de economía en 1974 y 1976, respectivamente, como también Lionel Robbins, Kart Popper, Robert Nosick y Richard Aaron². En términos ideológicos, el neoliberalismo lleva a la práctica una concepción que adopta como principio la desigualdad social. El neoliberalismo afirma la ideología de la desigualdad social como fundamento para el desarrollo de la competencia y la acumulación ganancias.

El neoliberalismo se convirtió en programa político del capital para viabilizar su reproducción, en estos términos, su auge estuvo asociado a la necesidad de enfrentar el declive

de las tasas de crecimiento del capitalismo mundial. Según Harvey, la tasa de crecimiento agregado que en los años sesenta fue de 3,5% cayó en los años setenta a 2,4% y en los ochenta a 1,4%³.

Al asumir los mandatos neoliberales, el Estado pone en funcionamiento distintas políticas que aseguran a las clases poseedoras de la riqueza a escala global la continuación de su dominio.

Respecto a la reconfiguración del papel del Estado señala Sassen: “Si bien el transnacionalismo y la desregulación han reducido el rol del Estado en el gobierno de los procesos económicos, el Estado permanece como último garante de los derechos del capital, ya sea nacional o extranjero. Las empresas que operan transnacionalmente quieren asegurar las funciones tradicionalmente ejercidas por el Estado en el terreno nacional de la economía, básicamente la garantía de los derechos de propiedad y los contratos. El Estado aquí puede ser concebido como representando una capacidad administrativa técnica que no puede ser aplicada por el momento por ningún otro acuerdo institucional; además, ésta es una capacidad sustentada por el poder militar”⁴.

Uno de los rasgos principales del neoliberalismo ha sido el fortalecimiento de la dimensión especulativa del capital, la cual subordina a la dimensión productiva gobernando la economía en su conjunto. La aplicación del neoliberalismo apunta ante todo a mejorar las condiciones para la acumulación de capital; por ello, produce el desplazamiento del Estado como agente productivo. El Estado deja de fungir como acumulador de capital, en su defecto, pasa a ser garante de tal acumulación, favoreciendo en primera instancia al capital financiero.

El Estado no sólo favorece al capital financiero, sino que actúa liberalizando el mercado laboral para implantar la tendencia a la baja de los salarios. El principal propósito del neoliberalismo es recuperar la tasa media de crecimiento del capital implantando para ello la tendencia a la baja de los salarios provocada por la flexibilización laboral.

Desde principios de los ochenta diversas instituciones financieras multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo dirigieron la liberalización financiera, comercial y laboral. En 1989 el Consenso de Washington ratificó tales

orientaciones y en los noventa la mayor parte de los Estados de América Latina vivieron la euforia neoliberal que permitió: 1. la privatización de las empresas del Estado que fueron creadas con préstamos que aún los estados latinoamericanos no terminan de pagar, 2. la mercantilización extensa de la vida, las personas y la naturaleza, y 3. la desposesión a los pueblos de los recursos y territorios.

3. EL AUTOGOLPE DE ESTADO Y LA IMPOSICIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES

A dos meses de su posesión, el gobierno Fujimori impuso dos medidas que perfilaron lo que serían las políticas prioritarias del régimen en el transcurso de la década. El 7 de agosto de 1990 decretó el Estado de emergencia en Lima y nueve provincias del país por un lapso de 30 días, y un día después decretó un plan de ajuste que contemplaba la supresión de los subsidios a productos de primera necesidad como el pan, la leche, el azúcar, la pasta, y la gasolina.

En el siguiente año, 1991, el presidente Fujimori enfrentó dificultades para sacar adelante su agenda, en la que figuraban como principales iniciativas la privatización de las empresas estatales más rentables y el otorgamiento de facultades discrecionales a las Fuerzas Armadas.

Al no contar con una bancada parlamentaria mayoritaria el gobierno no logró la inmediata aprobación de sus iniciativas. La oposición en el Congreso de la República estaba representada por las bancadas de los partidos Acción Popular (PAP) y el Frente Democrático (FREDEMO).

Mientras tanto se mantenía la presión de los organismos financieros internacionales en reclamo de ajustes que garantizaran el pago de la deuda y del gobierno estadounidense exigía resultados en el combate a la insurgencia. En esta coyuntura, el presidente Fujimori estableció una estrecha alianza con las Fuerzas Armadas para dar un autogolpe de Estado.

La doctrina de la seguridad nacional en tanto marco ideológico de actuación de las Fuerzas Armadas proveyó las condiciones para respaldar el desmantelamiento del régimen democrático liberal y su reemplazo por una dictadura que podría denominarse como soberana, en el sentido que le da Jorge Tapia al término. Para este, “Un último y fundamental elemento constitutivo de la doctrina de la seguridad

nacional es el desarrollo y aplicación del concepto de dictadura soberana. Tal teoría, estrechamente ligada a la doctrina decisionista establecida por el principal de los teóricos nazis del Derecho, Carl Schmidt, atribuye la soberanía a un estado de facto que, libre de restricciones heterónomas, aparece como la voluntad suprema en la arena política y en la generación del Derecho. El Estado, establecido de facto y vía insurreccional contra el régimen constitucional, se identifica a su vez con la voluntad de un líder individual o colectivo, dotado de un poder discrecional y sin más limitaciones que su propia automoderación”⁵.

El 5 de abril 1992, las Fuerzas Armadas ocuparon los edificios públicos mientras el presidente Fujimori anunciaba el cierre del Congreso de la República. Durante el autogolpe fueron saqueados los archivos del poder judicial⁶. Al día siguiente el ministro de economía Carlos Boloña Behr anunció la aplicación del conjunto de reformas económicas neoliberales.

Mediante el autogolpe se cerró el Congreso y se reformó el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Ministerio Público y el Tribunal de Garantías Constitucionales, la Contraloría General de la República y el Poder Electoral; lo anterior permitió llevar a cabo las iniciativas que el gobierno de Fujimori representaba.

La incompetencia de los políticos y “la amenaza terrorista”, constituida por la guerrilla Sendero Luminoso, fueron los pretextos utilizados para la implantación de la legislación de excepción, con la cual se extendió el control policial de la

población y se criminalizó todo tipo de oposición.

En este marco se intensificó la represión en las universidades públicas y varias de ellas fueron puestas bajo el control de las Fuerzas Armadas, “tal fue el caso de la Universidad Nacional de San Marcos, que fuera declarada en reorganización con autoridades y un cuerpo administrativo nombrado por el gobierno, provocando la renuncia o el despido de académicos connotados; la misma suerte corrió la Universidad Pedagógica Nacional-La Cantuta, de cuya residencia estudiantil fueron sacados y asesinados por las fuerzas militares nueve estudiantes y un profesor”⁷.

La disolución del parlamento, la clausura del poder judicial y de los órganos de control y su reemplazo por cuerpos de funcionarios afines al gobierno, y la criminalización de la oposición permitieron al gobierno Fujimori acelerar el desenvolvimiento de su agenda.

En noviembre de 1992, el Congreso disuelto fue reemplazado por un Congreso de carácter constituyente controlado por el presidente Fujimori. Un mes después habían sido expedidos 923 decretos, entre ellos, los que consagraron la privatización de las empresas estatales del hierro, zinc, petróleo, cementos, teléfonos y electricidad. La ineficiencia del estado y la necesidad de atraer inversiones sirvieron como propaganda para justificar las privatizaciones.

En la tabla 1 se presentan las empresas privatizadas entre 1992-1995 por montos superiores a 100 millones de dólares.

Tabla 1. Empresas privatizadas entre 1992-1995 por montos superiores a 100 millones de dólares

Año	Empresa privatizada	Comprador	Monto (MUSD)
1992	Empresa Minera de Hierro Perú	Consorcio Shougan	120
1993	Petromar 1	Petrotech	200
1994	Compañía Peruana de Teléfonos ENTEL	Telefónica de España	1391
	Cementos Lima	Sindicato de Inv. y Administración	103
	Empresa de Distribución Eléctrica del Norte (Edelnor)	Inversiones Distrilima	176
	Empresa de Distribución del Sur (Edelsur)	Ontario Quinta AVV	212
	Empresa Minera Especial Tintaya	MAGMA Copper Company	277
	Refinería de Zinc Cajamarquilla	Cominco y Marubeni Corporation	155
1995	Banco Continental	BBVA-Grupo Brescia	256
	Edegal	Generandes Co.	524

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

La política económica fujimorista se inscribió en el horizonte neoliberal privilegiando entre sus objetivos la apertura económica, la reducción de la inflación, el pago de la deuda externa, la desregulación estatal y el recorte del gasto social. En desarrollo de esta política “se eliminaron prácticamente todos los subsidios, las ventajas tributarias para los exportadores, el desarrollo rural y la protección de los sectores de más bajos ingresos, abriéndose el país a la importación indiscriminada. El Estado se retrajo totalmente de participar en la fijación de los salarios en el sector privado, estableció una baja sustancial en el salario mínimo, y determinó una reducción drástica de los sueldos y el empleo en el sector público”⁸.

El gobierno Fujimori se enfocó en la aplicación de los ajustes reclamados por los organismos financieros internacionales para dar cumplimiento al pago de la deuda externa. En 1991, la deuda externa ascendía a 24.000 millones de dólares, y a pesar del pago de servicios anuales por 1.329 millones de dólares, en 1996 había crecido a 33.805 millones de dólares, después de la transferencia de una parte sustancial de los ingresos percibidos por las privatizaciones al pago de la deuda, ésta bajó a 28.508 millones de dólares en 1997⁹.

En 1996, durante su segundo mandato, el gobierno Fujimori llegó a un acuerdo de reestructuración de la deuda con los miembros del Club de París, “comprometiéndose el Perú a pagar 16.767 millones de dólares entre 1996 y 2015, de una deuda que tenía un nivel de 6.000 millones de dólares en 1990”¹⁰. Un año después se cerró otro acuerdo para la reestructuración de la deuda de la banca privada.

Con una tasa de crecimiento económico de 12,9% y la disminución de la inflación a un 15,4%, el Perú se convirtió en “el milagro económico” de la década del noventa. Para los organismos financieros internacionales el régimen fujimorista constituía un paradigma así lo fuese a costa del total quebrantamiento del Estado de derecho.

4. EL ROL HISTÓRICO DE LAS FUERZAS ARMADAS

En el transcurso de la historia política del Perú las Fuerzas Armadas han ocupado un lugar privilegiado entre las instituciones estatales.

Según Pease, desde la culminación de la fase de independencia frente a España los militares fueron uno de los estamentos sociales más consistentes¹¹.

En 1821, San Martín declaró la independencia, estableciendo el estatus de protectorado del Río de La Plata para el Perú. Dos años después Bolívar culminó la gesta independentista con la derrota de los españoles en el reducto serrano de Junín y Ayacucho. Desde entonces, “ser militar y llevar bordada en la manga la frase “Vencedor de Ayacucho” fue el máximo y humilde galardón de los fundadores de la república”¹². A comienzos del siglo XIX, la aristocracia sobreviviente y los comerciantes se hallaban empobrecidos mientras los militares, que por lo general eran hijos o descendientes de funcionarios de la administración colonial, eran el grupo social más cohesionado y prospero.

En el transcurso del siglo XX, la intervención de los militares en la dirección del estado fue una constante. En 1930, un levantamiento militar acaudillado por el teniente coronel Luis Sánchez Cerro y respaldado por sectores civiles depuso al dictador Augusto Leguía quien gobernaba prácticamente desde 1908 siguiendo los mandatos estadounidenses¹³.

Entre 1932 y 1933, el APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) desplegó acciones armadas que contribuyeron al derrocamiento del gobierno del teniente coronel Sánchez Cerro. La más cruenta fue la rebelión de Trujillo, que fue duramente reprimida por el gobierno causando más de 500 muertos.

En 1933, el gobierno quedó en manos del general Benavides quien gobernó hasta ser depuesto por un golpe de estado encabezado por el general Odría en octubre de 1948. Durante el gobierno del general Odría se incrementaron las inversiones extranjeras en la agroindustria, la minería (hierro, cobre) y el petróleo. En 1956 fueron fundados los partidos Acción Popular y Demócrata Cristiano, convertido poco después en el partido Popular Cristiano.

Los presidentes Luis Sánchez Cerro (1931-1933), Oscar Benavides (1933-1939) y Manuel A. Odría (1948-1956) provinieron del estamento militar. El gobierno de Manuel Prado (1939-1945) contó con el apoyo decisivo de la institución militar. Entre 1962 y 1963

gobernó una junta militar que estableció al posterior gobierno de Fernando Belaunde Terry (1963-1968). Entre 1968 y 1980 gobernaron las Fuerzas Armadas.

Al surgimiento, en la década del sesenta, de focos guerrilleros en las regiones de Cuzco y Cajamarca el Estado peruano desarrolló una guerra contrainsurgente amparada bajo la doctrina estadounidense de la seguridad nacional que causó la muerte de 8.000 campesinos y el encarcelamiento de 3.700. Para este entonces, el Estado peruano contaba con el ejército más numeroso entre los países andinos. Entre 1950 y 1968, más de 4.000 oficiales peruanos participaron en el programa de asistencia militar de los Estados Unidos¹⁴.

En 1968 el régimen del general Juan Velasco Alvarado abrió un paréntesis en las relaciones de dependencia frente a los Estados Unidos, desarrollando un proyecto nacionalista con algunos resultados favorables en materia de reforma agraria y el control de los recursos petroleros. Sin embargo, dicho régimen no pudo consolidarse siendo el general Velasco Alvarado desplazado por las propias Fuerzas Armadas en 1975, para dar paso al gobierno del general Francisco Morales Bermúdez quien reinstaló la dominación “burguesa y proimperialista”¹⁵.

En la década del ochenta, ante el surgimiento de las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaruc, los privilegios de las Fuerzas Armadas se ampliaron por medio de la instauración de un fuero judicial particular. Al finalizar el gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry en 1985 la guerra contrainsurgente había causado 10 mil muertos y 6 mil desaparecidos¹⁶.

5. EL RÉGIMEN FUJIMORISTA Y LAS FUERZAS ARMADAS

El régimen fujimorista garantizó su permanencia en el poder gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas. Al amparo de la doctrina de la seguridad nacional y la corrupción las Fuerzas Armadas desarrollaron eficazmente los mandatos del “Estado de terror” profundizado por el fujimurismo.

Las investigaciones posteriores a la caída del régimen fujimorista revelaron numerosos casos de corrupción en el seno de las Fuerzas

Armadas. Uno de los más representativos fue el del general Nicolás Hermosa, exjefe del Comando Conjunto, a quien se le encontraron, sin que se pudiera probar la procedencia legal de los fondos, más de 20 millones de dólares en una de sus cuentas bancarias. El general Hermosa fue uno de los militares que concentró mayor poder en la ejecución de las decisiones gubernamentales y se mantuvo por más tiempo en su cargo, desde enero de 1992 hasta agosto de 1998. De acuerdo con Conaghan, durante el régimen fujimorista “altos oficiales (en las Fuerzas Armadas y los ministerios) cometieron crímenes de enriquecimiento ilícito, aprovechando los negocios del Estado, por ejemplo, las compras, para obtener beneficios personales. Vladimiro Montesinos¹⁷ fue el eje de estos grupos de oficiales. Hubo un sinnúmero de crímenes de este tipo, pero entre los más destacables se halla el saqueo de US\$ 300 millones practicado a la Caja Militar de Pensiones. Los involucrados fueron militares, un ministro del interior y un ministro de defensa”¹⁸.

Mediante la promulgación de la Ley de Amnistía en junio de 1995, el régimen otorgó impunidad a los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas en las décadas previas, incluyendo aquéllos llevados a cabo por organismos paramilitares como el grupo Colina.

El grupo Colina estaba integrado por miembros del Ejército y la Policía Nacional, tenía asignada la misión de colaborar en la persecución del terrorismo y la subversión armada, sus acciones se centraron en la intimidación, el secuestro, la tortura y el asesinato de dirigentes sindicales y populares, periodistas, y, en general, activistas opuestos al gobierno. El grupo Colina fue responsable de la masacre de Barrios Altos, en Lima, en la que fueron asesinadas 15 personas el 3 de noviembre de 1991, y La Cantuta, el 18 de julio de 1992, donde asesinados nueve estudiantes y un profesor.

Al carecer de legitimidad el régimen fujimorista se desplegó en el ejercicio autoritario del poder por medio de la represión, hasta hacer del estado un Estado terrorista. Al respecto señala Tapia: “El Estado, que inicialmente ha justificado el régimen de excepción y el ejercicio drástico de la autoridad como necesidades de la guerra contra la subversión y el terrorismo –que sabemos son

generalmente fraguados por el propio gobierno-, se convierte en el único terrorista. Usando la detención arbitraria, la desaparición de personas, el asesinato, los campos de concentración los juicios simulados, la creación de situaciones ficticias, etc., logra anular la disidencia y convencer por el terror. De ese modo logra no sólo identificar y destruir al enemigo actual y disuadir a los enemigos potenciales, sino convencer al ciudadano común de que su seguridad personal es función inevitable y obligada de su incondicionalidad frente al régimen”¹⁹.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos caracterizó años más tarde la promulgación de la Ley de Amnistía como “el suceso más indignante en la historia de los derechos humanos en el país”.

Según Manrique, casi la totalidad de los altos mandos que dirigían las fuerzas policiales y militares se involucraron en hechos delictivos. En el año 2001 a la conmemoración del cincuenta aniversario del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) fue publicado el folleto “100 años. Escuela Militar de Chorrillo” en la fotografía de la primera plana aparecían los siete más altos oficiales castrenses del país; de ellos, seis se encontraban en prisión o fugitivos dos años más tarde²⁰.

6. EL ANDAMIAJE DE LA CORRUPCIÓN

Mediante el autogolpe de estado de 1992 y la elaboración de una nueva Constitución

Nacional que se promulgó en 1993, el gobierno Fujimori aseguró el control de todas las instancias del Estado. La nueva Constitución dio una apariencia de legalidad al régimen al tiempo que consagraba los preceptos neoliberales como políticas de Estado e instituía la perpetuación del régimen. Con el “argumento” que había que darle estabilidad a las reformas políticas y económicas el gobierno estadounidense y los organismos financieros internacionales respaldaron la continuidad del régimen.

La reelección del gobierno Fujimori en 1995 se realizó en medio del estado de emergencia y bajo la autoridad militar en la mayor parte del territorio. Según Madueño, Fujimori fue reelegido gracias “al uso arbitrario de los recursos del Estado, la ilegal participación de jefes de las Fuerzas Armadas en la campaña, el estado de emergencia en más de la mitad del territorio y el fraude electoral en muchas provincias”²¹.

Durante su segundo mandato el régimen fujimorista prosiguió con las privatizaciones y el desmantelamiento del aparato productivo del Estado, siendo vendidas más empresas eléctricas, telefónicas, metalúrgicas y mineras. En total, durante el régimen fujimorista, se vendieron parcial o totalmente 187 empresas por un valor de 7.542 millones de dólares²². En la tabla 2 se muestran las empresas privatizadas por montos superiores a los 100 millones de dólares durante el segundo período del régimen fujimorista.

Tabla 2. Empresas privatizadas por montos superiores a los 100 millones de dólares durante el segundo período del régimen fujimorista

Año	Empresa privatizada	Comprador	Monto (MUSD)
1996	Sider Perú S.A.	WS Acera Steel Corp.	186
	Petro-Perú Refinería La Pampilla	Repsol, YPF, Mobil	181
	Acciones telefónica del Perú SAT Minorista Local	Participación Ciudadana	280
	Acciones telefónica del Perú SAT Internacional	Venta Internacional	918
1997	Empresa Metalúrgica de la Oroya	DOE RUN Perú	122
	Empresa Minera Mahr Túnel	Volcán Compañía Minera	128

Fuente: Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN).

Al analizar la importancia de la corrupción en la dictadura fujimorista, Ugarteche asevera que ésta no fue “un asunto de engrase de funcionarios sino de extracción de riqueza”, mencionando cómo ejemplo que en los videos

difundidos sobre los sobornos efectuados por el asesor presidencial Vladimiro Montesinos “se ha podido atisbar al Subsecretario de Estado encargado de América Latina del gobierno de los Estados Unidos comunicándose con Montesinos para resolver

un problema de una minera norteamericana y, luego de esto, al terminar su período, yendo a trabajar un período para dicha empresa”²³. Es decir, que a través del tráfico de influencias, los sobornos y en general las prácticas de corrupción los peruanos fueron desposeídos de sus empresas, las cuales pasaron a manos de los monopolios transnacionales.

Con el total control del Estado, el favorecimiento mediático ante “el milagro económico” operado, el respaldo del gobierno estadounidense por sus resultados en la lucha contrainsurgente y el beneplácito del capital financiero y transnacional beneficiado con el cumplido pago de la deuda externa y las privatizaciones, el gobierno Fujimori tuvo las condiciones para prolongarse en el ejercicio del poder estatal.

El régimen se proyectó como si fuera a durar por mucho tiempo, “sus seguidores en el Congreso hablaban de la necesidad de mantener a Fujimori 20 años en el poder. Con la reelección en 1995 y después de la segunda reelección en 2000, el fujimorismo aparecía como si fuera un proyecto político de largo plazo. Inclusive vemos en los “vladivideos” que en los años 1999 y 2000, Montesinos ya estaba en conversaciones con figuras políticas, pensando en qué hacer para la elección de 2005 (cuando probablemente Fujimori no hubiera sido candidato) y buscando a alguien de confianza para darle continuidad al régimen”²⁴.

En las elecciones de abril de 2000 el régimen fujimorista se reeligió nuevamente a través de la corrupción y el fraude. En esta oportunidad, “el fraude electoral montado por el régimen abarcó la fase preelectoral: ayuda alimentaria por voto, donaciones, intimidación, además de la conformación de una comisión de allegados a Fujimori comandados por Absalón Vázquez, que debían recolectar firmas para la inscripción del candidato”²⁵. Con un fraude avalado por el Jurado Nacional de Elecciones, el presidente Fujimori se impuso con el 51% de la votación sobre su contendor Alejandro Toledo quien obtuvo el 49% de los votos. A pesar de su victoria el presidente Fujimori sufrió un revés al no obtener la mayoría parlamentaria.

Los recursos financieros para la corrupción provinieron del presupuesto público, según Conaghan “más de cincuenta millones de dólares fueron canalizados por los ministerios

de la defensa, interior y las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia entre 1992 y 2000. Montesinos confesó que utilizó este dinero para pagar sobornos y los costos de la campaña electoral de Fujimori en el año 2000”²⁶.

Según Ugarteche, los organismos financieros internacionales desempeñaron un importante papel en las reelecciones de Alberto Fujimori al girar gigantescos desembolsos al Estado peruano en las fases pre-electorales. A quienes solicitaban la suspensión de los desembolsos para el gobierno por su ilegalidad, los organismos financieros respondían “que ellos son bancos apolíticos y no tenían por qué suspenderle los desembolsos al gobierno. Las cifras de giro en el período electoral fueron de mil millones de dólares en los seis meses anteriores a las elecciones. Mucho dinero para un país pobre. Eso es ahora deuda de todos los peruanos. El vicepresidente del BM para América Latina fue a saludar al presidente electo Fujimori en agosto de 2000 para ofrecerle nuevamente su apoyo. Del mismo modo, en mayo del 2000 fue a Lima el Presidente del Banco Interamericano y negó que se suspendería los desembolsos, pues ellos eran apolíticos”²⁷.

Durante la década del setenta, el papel de la financiación internacional en el sostenimiento de regímenes dictatoriales fue también muy importante, cabe recordar que “a pesar de las declaraciones y las resoluciones y las protestas, el régimen del general Pinochet recibió, durante 1976, 290 millones de dólares de ayuda directa de los Estados Unidos sin autorización parlamentaria. Al cumplir el primer año de vida, la dictadura argentina del general Videla había recibido quinientos millones de dólares de bancos privados norteamericanos y 415 millones de dos instituciones (Banco Mundial y BID) donde los Estados Unidos tienen influencia decisiva. Los derechos especiales de giro de la Argentina en el FMI, que eran de 64 millones de dólares en 1975, habían subido a 700 millones un par de años después”²⁸.

7. LA HORA DEL RELEVO

El terror, el fraude y la corrupción fueron los métodos predilectos del régimen, sin embargo, sólo hasta mayo de 2000 el gobierno estadounidense pareció tomar nota. En la fase preelectoral de la segunda reelección de Fujimori, la Secretaria de Estado de los

Estados Unidos, Madeleine Allbright advirtió al gobierno Fujimori que apoyaría su reelección con la condición que retirara al excapitán del Ejército y asesor de inteligencia nacional Vladimiro Montesinos del gobierno²⁹.

El presidente Fujimori obtuvo un nuevo triunfo electoral y realizó su toma de posesión ante los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Vladimiro Montesinos organizó una reunión en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la que todos los militares de alta graduación reafirmaron su lealtad al presidente. El Cardenal Cipriani promovió la celebración de una misa en la Catedral de Lima en apoyo al gobierno. El presidente Fujimori ignoró la advertencia estadounidense.

Dos meses después, el 14 de septiembre de 2000, fue difundido por los medios de comunicación un video en el que apareció el parlamentario Luis Alberto Kouri, miembro del Partido Popular Cristiano y hermano del alcalde del Callao, recibiendo 15.000 dólares de manos del asesor presidencial Vladimiro Montesinos para que cambiara de partido, de Perú Posible a Perú 2000, y completara con su voto la mayoría que requerían para ser votadas las iniciativas del gobierno en el Congreso.

Después de la difusión de este video fueron filtrados numerosas grabaciones de este tipo, realizadas por Montesinos en sus oficinas del Servicio de Inteligencia Nacional. En ellas se muestran sus reuniones con dirigentes políticos, empresarios y dueños de medios de comunicación en las que pagaba sobornos de miles de dólares³⁰.

La difusión de los videos permitió conocer cómo el gobierno compró a empresarios, magistrados, parlamentarios y altos funcionarios cuyo apoyo fue vital para darle la apariencia de legalidad al régimen. Según Poole y Renique³¹, la política de corrupción implementada a través del Sistema de Inteligencia Nacional, mediante sobornos a los jueces y a los propietarios de los medios de información, fue la que permitió legitimar el terror y legalizar la impunidad, para hacer invisible la violencia desplegada por el Estado. El control sobre los medios de información y su utilización en función del régimen permitió dicha invisibilización. En el transcurso de la dictadura fujimorista “se uniformizó la manera de presentar la información, no sólo filtrando qué debía decirse y qué callarse sino inclusive

la manera en que debía decirse aquello que podía ser informado (...) el Servicio de Inteligencia realizó cursos de formación dirigidos a los periodistas, para enseñarles de qué manera debían presentar la información, “para ayudar al esfuerzo de guerra”³².

La difusión de los videos precipitó la salida de Montesinos del gobierno y su partida al exterior, meses después, en noviembre del año 2000, le tocó el turno a Fujimori, quien huyó a Japón. A su caída Fujimori ya había cumplido con los mandatos encomendados por la globalización neoliberal.

Con la caída del régimen fujimorista se abrió paso a la conformación de una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) que investigó las muertes y desapariciones forzadas de origen político durante las décadas del ochenta y del noventa. El Informe final de la Comisión fue dado a conocer a mediados de 2003, éste estimó en 69.280 el número de muertos y desaparecidos, 75% de ellos quechua-hablantes, 90% de ellos, campesinos³³.

CONCLUSIÓN

En el caso del Perú, el neoliberalismo se aplicó sobre la base del desmonte de las reglas de la democracia liberal, ejemplo de ello fueron el autogolpe de Estado de 1992, las privatizaciones mediante decretos dictatoriales, la recomposición corrupta de la institucionalidad, la fraudulenta prolongación del régimen, el vasto genocidio étnico llevado a cabo y el otorgamiento de amnistía a los miles de crímenes cometidos. El inmenso despliegue de violencia evidenció que para los intereses de las corporaciones transnacionales y los organismos financieros internacionales las reglas democráticas, los derechos sociales y las garantías civiles son cuestiones secundarias.

El desarrollo del neoliberalismo exigió la implantación de un Estado terrorista que destruyó numerosas organizaciones populares para cumplir con los propósitos de la monopolización transnacional. La gesta del terror profundizada durante el régimen fujimorista siguió los derroteros de la doctrina estadounidense de la seguridad nacional para guiar a las Fuerzas Armadas en la realización de un vasto genocidio.

El régimen fujimorista afirmó una concepción fascista, legitimadora de la segregación y el desprecio de la vida de los más humildes. La asimilación de esta concepción permitió que las clases medias y la sociedad urbana fueran en general indiferentes frente al genocidio.

Según Manrique “La gran mayoría de las víctimas de la violencia fueron indígenas, tradicionalmente considerados el último peldaño de la escala social en el país; personas que a lo más tienen una ciudadanía de segundo orden y que no se percibe que tengan iguales derechos que los integrantes de la sociedad dominante. En un país fuertemente fragmentado no sólo por las brechas económico sociales, étnicas y regionales, donde el racismo antiindígena construye escalas de humanidad diferenciales, según las cuales los indios no son tan humanos como los otros peruanos, no existe una conciencia generalizada de que la desaparición forzada de miles y la matanza de decenas de miles de personas constituya una tragedia nacional”³⁴.

NOTAS

¹ Cueva, Agustín, *El desarrollo capitalista en América Latina*. México, Siglo XXI, 2007, 265.

² Ávila, José Luis, *La era neoliberal*. México, Universidad Nacional Autónoma de México 2006, 14.

³ Harvey, David, “El neoliberalismo como creación destructiva”, *Revista Memoria*, 232 (septiembre de 2008).

⁴ Sakia Sassen, *Los espectros de la globalización*. México, Fondo de Cultura Económica, 2003, 223.

⁵ Tapia Valdés, Jorge, “La doctrina de la seguridad nacional y el rol político de las Fuerzas Armadas”, en *El Estado periférico latinoamericano*. Buenos Aires, Eudeba, 1988, 250.

⁶ Ugarteche, Oscar, “Montesinos, la corrupción y las relaciones Perú - Estados Unidos”. *Revista Ciberayllu* Julio de 2001. Disponible desde Internet en:

<http://www.andes.missouri.edu/andes/Comentario/OU_Montesinos.html> [Con acceso el 27-2-2009].

⁷ Madueño Paulette, Ruth, *Perú: fragilidad institucional del Estado 1930-2002*. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2004, 228.

⁸ *Ibid.*, 211.

⁹ *Ibid.*, 210.

¹⁰ González de Olarte, Efraín, *El neoliberalismo a la peruana, economía política del ajuste estructural, 1990-1997*. Lima, Consorcio de investigación científica-Instituto de Estudios Peruanos, 1998, 46.

¹¹ Pease, Franklin, *Breve historia del Perú*. México, Fondo de Cultura Económica, 1995, 89.

¹² *Ibid.*, 89.

¹³ Durante su segundo mandato cuadruplicó el endeudamiento con los bancos norteamericanos de 81 mil millones de soles a 315 mil millones de soles. Pease, Franklin, *Breve historia...*, op. cit., 167.

¹⁴ Ver al respecto: Monteforte, Mario, *La solución militar a la peruana*. México, Instituto de Investigaciones Sociales Universidad Nacional Autónoma de México, 1967.

¹⁵ Cotler, Julio, “Perú: Estado oligárquico y reformismo militar”, en *América Latina Historia de medio siglo*. México, Siglo XXI, 2003, 429.

¹⁶ Manrique, Nelson, “El tiempo del miedo, la violencia política en el Perú 1980-1996”. *Revista Ciberayllu* enero de 2003. Disponible desde Internet en:

<http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/NMTiempo/NM_TiempoIntro.html> [Con acceso el 27-07-2009].

¹⁷ Vladimiro Montesinos fue retirado del ejército peruano en 1977 por cargos de traición a la patria al conocerse que vendió información a la CIA en 1974 sobre equipo militar comprado por el régimen del general Velasco Alvarado a la Unión Soviética.

¹⁸ Conaghan, Catherine, “El estado corruptor: crimen y política en el Perú, 1990-2000”. *Revista Espacio Crítico* 7 (julio-diciembre de 2007). Disponible desde Internet en: <<http://www.espaciocritico.com/Revista.asp?numero=8&articulo=320>> [Con acceso el 27-07-2008].

¹⁹ Tapia Valdés, Jorge, *La doctrina de la seguridad...*, op. cit., 249.

²⁰ Manrique, Nelson, *El tiempo del miedo...*, op. cit.

²¹ Madueño Paulette, Ruth, *Perú: fragilidad institucional...*, op. cit., 235.

²² De Fujimori a Toledo: de las Privatizaciones a los Bonos, Giovanna Aguilar-Silvio Rendón, *Revista Palestra*, Febrero de 2006. Disponible desde Internet en:

<<http://palestra.pucp.edu.pe/index.php?id=209>>

[Con acceso el 27-2-2009].

²³ Ugarteche, Oscar, *Montesinos, la corrupción...*, op. cit.

²⁴ Conaghan, Catherine, *El estado corruptor...*, op. cit.

²⁵ Madueño Paulette, Ruth, *Perú: fragilidad institucional...*, op. cit., 241.

²⁶ Conaghan, Catherine, *El estado corruptor...*, op. cit.

²⁷ Ugarteche, Oscar, *Montesinos, la corrupción...*, op. cit.

²⁸ Galeano, Eduardo, *La venas abiertas de América Latina*, Bogotá, Tercer Mundo, 1996, 371.

²⁹ Ugarteche, Oscar, “¿Democracia y mercado? Comenzando por el fin”. *Revista Ciberayllu* noviembre de 2004. Disponible desde Internet en: <http://www.andes.missouri.edu/andes/Especiales/OU_AdiosEstado.html> [Con acceso el 27-2-2009].

³⁰ *Ibid.*

³¹ Poole, D., Rénique, G., “El terror y el Estado privatizado: una parábola peruana”. *Revista*

Ciberayllu julio de 2002. Disponible desde Internet en:

<http://www.andes.missouri.edu/ANDES/Especiales/DPGR_Terror.html> [Con acceso el 27-2-2009].

³² Manrique, Nelson, *El tiempo del miedo...*, op. cit.

³³ El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación se puede consultar en: <<http://www.cverdad.org.pe/ifinal/index.php>>.

³⁴ Manrique, Nelson, *El tiempo del miedo...*, op. cit.